

UN CONGRESO CONTRA LOS DERECHOS:

Balance de las reformas (2024–2026)

ENTRE LINEAS
Observatorio de Proyectos de Ley





1. Contexto y resumen ejecutivo

Entre 2024 y 2026, el Congreso de la República aprobó un conjunto de reformas que, lejos de responder a la crisis institucional y de seguridad que enfrenta el país, **debilitaron la independencia del sistema de justicia,** contravinieron los derechos de acceso a la justicia y a la verdad de cientos de víctimas, y redujeron la capacidad del Estado para investigar y sancionar delitos. Estas normas, vistas en conjunto, evidencian un patrón legislativo que favorece la impunidad y erosiona los mecanismos de control democrático.

2. ¿Cómo se aprobaron estas reformas?

La aprobación de las reformas entre 2024 y 2026 también evidenció un patrón en el proceso legislativo que debilitó los mecanismos de control democrático. Este patrón puede identificarse en tres prácticas recurrentes:

Desatención de estándares y pronunciamientos internacionales:

Diversas reformas fueron aprobadas pese a los estándares, decisiones y pronunciamientos emitidos por los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El 1 de julio de 2024, en el marco de la supervisión del cumplimiento de las sentencias dictadas en los casos Barrios Altos (2001) y La Cantuta (2006), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó al Estado peruano suspender la tramitación del entonces Proyecto de Ley No. 6951/2023-CR[1], al considerar que su aprobación tendría un impacto negativo e irreparable sobre el derecho de acceso a la justicia de las víctimas. No obstante, el Congreso continuó con el procedimiento legislativo y aprobó posteriormente la Ley No. 32107[2].

[1] Titulado “Proyecto de Ley que precisa la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana”.
[2] Ley que precisa la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana. Para mayor información, véase: https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/Ley-32107-LPDerecho.pdf

Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha cuestionado reiteradamente la aprobación de leyes de amnistía, las modificaciones al marco normativo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) y la ampliación de la competencia de la jurisdicción militar policial para investigar y juzgar presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por agentes estatales. Respecto de esta última, la CIDH recordó que los Estados tienen la obligación de combatir la impunidad y que la jurisdicción militar debe tener un alcance restrictivo y excepcional, de conformidad con los estándares interamericanos[5].

Desestimación de la opinión técnica especializada:

Diversas reformas fueron aprobadas pese a las advertencias formuladas por el Ministerio Público, la Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sobre su incompatibilidad con la Constitución Política del Perú, las obligaciones internacionales asumidas por el Estado peruano y el riesgo de generar impunidad. En el caso de la ya citada Ley No. 32107, antes de su promulgación, el Ministerio Público emitió la única opinión desfavorable[6], al advertir que desconocía la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y afectaba el derecho a la verdad de las víctimas[7]. Sin embargo, al elaborar el informe que sustentó la aprobación de la ley, el Congreso se limitó a desarrollar los argumentos contenidos en las opiniones favorables, sin examinar las observaciones formuladas por el Ministerio Público.

[3] Véase: CIDH (2025, 26 de junio). Comunicado de prensa: CIDH exhorta al Perú a abstenerse de aprobar leyes que otorgan amnistías por graves violaciones a los derechos humanos. https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2025/128.asp&utm_content=country-per&utm_term=class-mon

[4] Véase: CIDH (2025, 12 de mayo). Perú: CIDH manifiesta su grave preocupación por los artículos de la ley que modifica la agencia de cooperación internacional. https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2025/128.asp&utm_content=country-per&utm_term=class-mon

[5] CIDH - IACHR [@CIDH]. (25 de junio de 2026). #Perú: La #CIDH rechaza el dictamen aprobado por el Congreso el 23 de junio que habilitaría a la jurisdicción militar policial [Post]. X. https://x.com/CIDH/status/2070172281318387976

[6] Se enviaron 19 pedidos de opinión, de los cuales 7 pertenecían a instituciones públicas; no obstante, solo obtuvieron respuesta del MINJUSDH, FISCALÍA, MINDEF y MININTER. El Ministerio del Interior se declaró incompetente en la materia en tanto su ámbito de competencia se circunscribe a las materias de orden interno y orden público. Por su parte, el Ministerio de Defensa se pronunció favorablemente y lo declaró viable, en tanto, en su opinión, se afectaba el principio de irretroactividad de las normas.

[7] Ministerio Público (2024). Informe N° 000126-2024-MP-FN-CFSN-FPS-DHI. Véase: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/visor-pdf/documento-anexo?id=Nzg4Mw%3D%3D

Aceleración del procedimiento legislativo:

El Congreso recurrió de manera reiterada a mecanismos como la exoneración del trámite en comisiones y el rechazo de reconsideraciones para acelerar la aprobación de reformas, reduciendo las oportunidades de debate y de escrutinio parlamentario. Esta práctica continuó durante el receso legislativo. Inicialmente, la Comisión Permanente contó con atribuciones para aprobar leyes y resoluciones hasta el 24 de junio de 2026; posteriormente, mediante una nueva delegación de facultades, este plazo se amplió hasta el 15 de julio de 2026. Si bien esta delegación se encuentra prevista en la Constitución, en la práctica facilitó la aprobación de reformas controvertidas con menores oportunidades de deliberación pública, como ocurrió con la ampliación de la competencia de la jurisdicción militar policial, la tipificación de los delitos de lesa humanidad[8], y la reforma del régimen de atención a la salud mental de las personas con discapacidad[9].

3. Consecuencias de las reformas: crisis institucional, democrática y de derechos humanos

Lejos de constituir reformas aisladas, las modificaciones legislativas aprobadas entre 2024 y 2026 produjeron un efecto acumulativo que debilitó el sistema de justicia, erosionó los mecanismos de rendición de cuentas y redujo la protección de los derechos humanos. A continuación, se presentan sus principales consecuencias.

[8]Se ha criticado que el Proyecto de Ley 14337/2025-CR, que tipifica los delitos de lesa humanidad, resulta más restrictivo que el Estatuto de Roma pese a invocarlo como fundamento. Entre las objeciones señaladas: limita estos delitos a solo seis conductas, dejando fuera figuras como la esclavitud o la esterilización forzada; exige que el "ataque" sea masivo y a gran escala, y que el "ataque sistemático" esté directamente vinculado a una política estatal, estándares difíciles de acreditar en la práctica; y añade una exigencia de dolo que limitaría la responsabilidad penal a los mandos superiores, excluyendo a los ejecutores directos. Se advierte que estas exigencias harían que hechos ya ocurridos —los crímenes de los años 80 y 90, y las muertes de 2022-2023 durante la represión de protestas— dejen de calificar como lesa humanidad y pasen a tratarse como delitos comunes sujetos a prescripción, en línea con la Ley No. 32107. Para mayor información, véase: Montoya, Y. (21 de julio, 2026). Tipificar para imposibilitar la represión de delitos de lesa humanidad. Los candados del proyecto de ley aprobado por el Congreso de la República. IDEHPUCP. https://idehpucp.pucp.edu.pe/boletin-eventos/tipificar-para-imposibilitar-la-represion-de-delitos-de-lesa-humanidad-los-candados-del-proyecto-de-ley-aprobado-por-el-congreso-de-la-republica/

[9] Ley No. 32697, que modifica la Ley No. 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, publicada el 4 de julio de 2026. Pese a presentarse como una norma de protección, reintroduce un modelo de atención en salud mental basado en la institucionalización, al obligar al Estado a promover la creación de centros asistenciales especializados y albergues temporales para personas con discapacidad. Para mayor información, véase: Pulido, D. (14 de julio, 2026). ¿Protección o segregación?: La promoción de la institucionalización de las personas con discapacidad mediante la Ley No. 32697. IDEHPUCP. https://idehpucp.pucp.edu.pe/boletin-eventos/proteccion-o-segregacion-la-promocion-de-la-institucionalizacion-de-las-personas-con-discapacidad-mediante-la-ley-no-32697/

3.1. Debilitamiento de la autonomía del Ministerio Público y del sistema de persecución penal

La reforma del sistema penal, materializada mediante las Leyes No. 32130, No. 31990 y No. 32181, debilitó la autonomía constitucional del Ministerio Público al redistribuir facultades esenciales de investigación en favor de la Policía Nacional del Perú (PNP) y restringir herramientas fundamentales como la detención preliminar judicial y la colaboración eficaz. En conjunto, estas modificaciones redujeron la capacidad del sistema de justicia para investigar y sancionar eficazmente la criminalidad organizada y otras formas de criminalidad compleja.

Ley No. 32130 - “Ley que modifica el C.P.Penal, DL N° 957, para fortalecer la investigación del delito como función de la PNP y agilizar los procesos penales”

Esta ley modificó treinta y tres artículos del Código Procesal Penal (CPP) e incorporó la figura de la "conducción operativa" de la investigación a cargo de la PNP. Con ello, alteró el modelo previsto en el artículo 159 de la Constitución, que atribuye al Ministerio Público la dirección de la investigación del delito. Entre las principales modificaciones se encuentran:

- **Artículo 65.4:** Divide la dirección de la investigación entre el Ministerio Público, encargado de la estrategia jurídica, y la PNP, responsable de la estrategia operativa.
- **Artículos 321 y 330:** Establecen que la investigación preliminar está a cargo de la PNP, bajo la conducción jurídica del fiscal.
- **Artículo 322:** Permite que la PNP realice la investigación material del delito por iniciativa propia o a pedido de parte.
- **Artículo 67.1:** Autoriza a la PNP a realizar diligencias urgentes de investigación, incluso antes de una disposición fiscal.
- **Artículo IV del Título Preliminar:** Redefine el rol del Ministerio Público como conductor jurídico de la investigación, mientras la PNP asume un papel central en su ejecución.

Antes de esta reforma, el Ministerio Público dirigía la investigación penal y la Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutaba las diligencias bajo su conducción. Con la Ley No. 32130, la PNP adquiere un mayor margen de actuación en la conducción operativa de la investigación preliminar, mientras que el Ministerio Público ve circunscrita su intervención a la conducción jurídica. En la práctica, esta redistribución de funciones configura una dirección compartida de la investigación penal que puede afectar la unidad de la estrategia investigativa y apartarse del modelo acusatorio previsto en la Constitución.

Ley No. 31990 - “Ley que modifica los artículos 473, 476-A y 481-A del Nuevo Código Procesal Penal, a fin de fortalecer el proceso especial por colaboración eficaz”

Entre las principales modificaciones introducidas por esta ley se encuentran:

- **Artículo 473.11:** Establece un plazo máximo de ocho meses para concluir el proceso de colaboración eficaz, prorrogable por cuatro meses en casos complejos y ocho meses en casos de crimen organizado. Antes de esta reforma, no existía un plazo legal fijo.
- **Artículo 473.10:** Prohíbe utilizar la declaración de un colaborador eficaz para corroborar la de otro, impidiendo así la corroboración cruzada.
- **Artículo 481-A.3:** Exige que cada declaración sea corroborada de manera independiente dentro de su propia carpeta fiscal, lo que dificulta construir una prueba conjunta en investigaciones complejas.
- **Artículo 473.12:** Establece responsabilidad administrativa, civil y penal para el fiscal por la filtración de información del proceso, pese a que también intervienen funcionarios del Poder Judicial, la PNP y el propio Ministerio Público.

Estas modificaciones reducen la eficacia de la colaboración eficaz en investigaciones que requieren cooperación internacional, pericias financieras o el análisis de estructuras criminales complejas. La Fiscalía de la Nación, la Procuraduría General del Estado, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo advirtieron que los nuevos plazos y restricciones limitan la utilidad de esta herramienta.

Ley No. 32181 - Ley que modifica el Código Penal, Decreto Legislativo No. 635, y el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), Decreto Legislativo 957, a fin de garantizar el principio de presunción de inocencia y brindar mayor protección al personal de la Policía Nacional del Perú

Los principales cambios introducidos por esta ley son los siguientes:

- **Restricción de la detención preliminar judicial.** La ley derogó el inciso a) del numeral 1 del artículo 261 del NCPP, que facultaba al juez a ordenar la detención preliminar cuando existieran fundados elementos para considerar que una persona había cometido un delito sancionado con una pena superior a cuatro años y existiera peligro de fuga u obstaculización de la investigación, aun cuando no hubiera flagrancia. Como consecuencia, los fiscales solo pueden solicitar esta medida en casos de flagrancia o cuando la persona investigada se haya fugado de un establecimiento penitenciario o de un centro de detención.

- **Restricciones a las medidas coercitivas contra el personal policial.** La ley incorporó los artículos 261-A y 268-B y modificó el artículo 292-A del NCPP para prohibir que el Ministerio Público solicite y que el juez dicte detención preliminar judicial o prisión preventiva contra efectivos de la Policía Nacional del Perú en actividad que, al hacer uso reglamentario de sus armas, ocasionen lesiones o la muerte. Asimismo, estableció responsabilidad funcional para los fiscales y jueces que incumplan esta prohibición.

En conjunto, estas modificaciones debilitan la capacidad del Estado para investigar y perseguir eficazmente el delito. Al restringir la detención preliminar judicial a supuestos de flagrancia o fuga, se pierden horas cruciales para asegurar la presencia de los investigados y preservar elementos probatorios, lo que incrementa el riesgo de fuga y de obstaculización de las investigaciones. Asimismo, las disposiciones que prohíben solicitar o imponer medidas coercitivas contra miembros de la Policía Nacional del Perú que hayan hecho un uso "reglamentario" de sus armas fueron promulgadas en un contexto marcado por las investigaciones sobre la actuación policial durante las protestas de finales de 2022 e inicios de 2023, en las que 49 personas perdieron la vida en enfrentamientos directos con las fuerzas del orden. En la práctica, estas disposiciones convierten el uso reglamentario del arma en un supuesto de inmunidad procesal prácticamente automática, al impedir una evaluación judicial individualizada sobre la necesidad de imponer medidas cautelares. Consideradas conjuntamente con las Leyes N.os 32130 y 31990, estas reformas evidencian un patrón de debilitamiento de la autonomía constitucional del Ministerio Público, al trasladar facultades esenciales de la investigación penal hacia la Policía Nacional del Perú y ampliar los mecanismos de protección procesal de sus agentes.

3.2. Fortalecimiento de la impunidad frente al crimen organizado

La aprobación de las Leyes No. 32108, No. 32054 y No. 32326 configuró un marco normativo que dificulta la investigación y sanción de las organizaciones criminales, al tiempo que restringe herramientas esenciales para la recuperación de activos de origen ilícito. En conjunto, estas reformas favorecen escenarios de impunidad para redes vinculadas a la corrupción, el narcotráfico, la minería ilegal y otras formas de criminalidad organizada.

La Ley No. 32108 modificó la definición de organización criminal del artículo 317 del Código Penal haciéndola más restrictiva. Antes de la reforma, bastaba con que dos o más personas se agruparan con el fin de cometer delitos para configurar el tipo penal.

Tras la modificación, se exige que el grupo esté compuesto por tres o más integrantes, con una estructura organizada, estabilidad o permanencia y reparto de roles, y que los delitos perseguidos sean graves (pena mayor de seis años), incorporando además como finalidad típica el beneficio económico y el control de mercados ilegales. La norma también estableció agravantes específicas para líderes o financistas, organizaciones transnacionales, organizaciones que operan desde establecimientos penitenciarios y aquellas que usan nombres o símbolos para intimidar. Al elevar estos requisitos, la ley no eliminó las técnicas especiales de investigación —levantamiento del secreto de las comunicaciones, interceptación telefónica, agente encubierto, entrega vigilada, colaboración eficaz, medidas especiales de investigación patrimonial—, pero sí reforzó las condiciones para su adopción, estableció límites temporales para algunas medidas cautelares (como el bloqueo de cuentas) e incorporó una excepción respecto de los bienes y activos de las organizaciones políticas legalmente reconocidas.

En esa misma línea, la Ley No. 32054 eliminó las sanciones más graves para organizaciones políticas —la disolución, la suspensión de actividades y la clausura de locales—, permitiéndoles seguir funcionando aun cuando estén involucradas en un proceso penal, y redujo el catálogo de sanciones administrativas y penales aplicables a multas y algunas medidas previstas en la Ley de Organizaciones Políticas. La ley no impide que los partidos sean investigados o incorporados a un proceso penal, ni que se les atribuya responsabilidad cuando corresponda, pero sí reduce el margen de sanción disponible frente a este tipo de vínculos.

Por su parte, la Ley No. 32326 limitó —sin prohibir— la posibilidad de decomisar bienes al exigir como regla general una sentencia penal firme, prohibir la subasta anticipada de bienes y establecer la devolución obligatoria si la demanda es rechazada, además de introducir mayores garantías procesales: derecho de defensa desde el inicio de la indagación patrimonial, notificación obligatoria a terceros con derechos inscritos, oposición contra medidas cautelares y el recurso de casación.

3.3. Retroceso en materia de derechos humanos

El debilitamiento de la autonomía del Ministerio Público y el fortalecimiento de la impunidad frente al crimen organizado no fueron los únicos efectos del patrón legislativo descrito. En el mismo periodo, el Congreso aprobó un conjunto de reformas que retrocedieron en la protección de derechos humanos previamente reconocidos, afectando la igualdad de género, el espacio cívico, los derechos de la población trans y no binaria, y el derecho a la verdad, justicia y reparación de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.

- **Publicación de la Ley No. 28983 (PL No. 8731), 24/12/2025:**

Este proyecto ha socavado décadas de progreso en igualdad y protección social, contraviniendo alertas internacionales de organismos de la ONU. Específicamente, este proyecto sustituye las referencias a “igualdad de género” por “equidad” o “igualdad de oportunidades”. Asimismo, la ley reemplaza la Educación Sexual Integral por la "Educación Sexual con base Científica, Biológica y Ética" y obliga a todas las instituciones públicas a adecuar sus políticas, planes y programas en un plazo máximo de un año, eliminando de sus marcos de actuación el enfoque de género y las referencias a la violencia de género. Ante ello, durante el debate parlamentario se advirtió que esta reforma contradice compromisos internacionales del Estado derivadas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará.

- **Publicación de la Ley No. 32301 (12/2025) “Ley Mordaza”:**

Esta ley modifica el marco regulatorio de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional con efectos directos sobre el espacio cívico y el acceso a la justicia. Bajo el argumento de fortalecer el trabajo de la APCI, esta ley propone un control indebido sobre el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, dejando la puerta abierta a decisiones arbitrarias, discrecionalidad y censura de voces críticas, lo que puede afectar la rendición de cuentas del Estado. La ley establece como falta "muy grave" el uso de recursos provenientes de la cooperación para asesorar, financiar o asistir acciones administrativas o judiciales en instancias nacionales o internacionales contra el Estado peruano, lo que puede conllevar el cierre de organizaciones y atentar contra el derecho a defender derechos humanos.

- **Ley No. 32331, 02/04/2025:**

Esta ley promulgada bajo la premisa de fortalecer el derecho a la indemnidad sexual de niños y adolescentes, impone de manera obligatoria que el uso de servicios higiénicos, duchas y vestidores públicos se rija estrictamente por el sexo biológico de las personas. Esta norma vulnera derechos fundamentales al institucionalizar la transfobia estatal y la discriminación, ya que vincula de manera prejuiciosa e injustificada la identidad de género trans con un peligro delictivo para las infancias (véase el proyecto de ley, el cual no cuenta con fundamento técnico respecto a la obligatoriedad del uso de los servicios estrictamente regido por el sexo biológico[10]).

[10] Véase: PL N° 08457/2023-CR

En la práctica, la ley criminaliza y restringe el derecho al libre tránsito y al acceso a servicios públicos esenciales (como educación, salud y trámites administrativos) para la población trans y no binaria; además, atenta gravemente contra su integridad física y psicológica al forzar a las personas a ingresar a espacios segregados que no coinciden con su expresión de género, exponiéndolas a escenarios de acoso, humillación y violencia, lo cual contraviene directamente los estándares de la Opinión Consultiva OC-24/17 de la Corte IDH[11] sobre el derecho a la identidad y a la dignidad humana.

- **Vulneración del derecho a la verdad, justicia y reparación:**

La aplicación de la Ley No. 32107, sumada a la amnistía otorgada por la Ley No. 32419, restringió severamente el acceso a la justicia penal para miles de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, paralizando procesos emblemáticos y dejando en la impunidad abusos cometidos por agentes estatales. Su aplicación puede conducir al archivo, paralización o terminación anticipada de investigaciones y procesos penales vinculados con casos emblemáticos como Barrios Altos, La Cantuta, Accomarca, Putis, Cayara y las investigaciones por esterilizaciones forzadas, entre otros, favoreciendo la impunidad de los responsables. La afectación no se limita al derecho de acceso a la justicia penal, sino que también menoscaba el derecho de las víctimas y de la sociedad a conocer la verdad de lo ocurrido, así como su derecho a obtener una reparación integral y garantías de no repetición. Estas medidas contradicen de manera directa los estándares del derecho internacional de los derechos humanos que prohíben las amnistías y otros obstáculos jurídicos respecto de graves violaciones a los derechos humanos, imponen el deber estatal de investigar, juzgar y sancionar a los responsables y reconocen la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y demás crímenes internacionales, conforme a la jurisprudencia de la Corte IDH[12].

[11] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-24/17, de 24 de noviembre de 2017, solicitada por la República de Costa Rica. Identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo. Obligaciones estatales en relación con el cambio de nombre, la identidad de género y los derechos derivados de un vínculo entre parejas del mismo sexo (interpretación y alcance de los artículos 1.1, 3, 7, 11.2, 13, 17, 18 y 24, en relación con el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). seriea_24_esp.pdf

[12] En Barrios Altos vs. Perú (2001), la Corte IDH sostuvo que: “son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos” (párrafo 41). En La Cantuta vs. Perú (2006), la Corte IDH señaló que: “los hechos de La Cantuta, cometidos contra las víctimas ejecutadas extrajudicialmente o desaparecidas forzadamente, constituyen crímenes contra la humanidad que no pueden quedar impunes, son imprescriptibles y no pueden ser comprendidos dentro de una amnistía” (párrafo 225).

Conclusiones

Las reformas aprobadas entre 2024 y 2026 no constituyen modificaciones aisladas ni responden únicamente a criterios de política criminal o de reorganización institucional. Consideradas en conjunto, evidencian un patrón legislativo orientado a debilitar los mecanismos de control democrático, restringir la capacidad del Estado para investigar y sancionar delitos, reducir el espacio cívico y retroceder en la protección de derechos humanos. Su efecto acumulativo compromete principios esenciales del Estado de Derecho, como la separación de poderes, la independencia de las instituciones de justicia, la rendición de cuentas y el acceso a la justicia de las víctimas.

Este escenario se ve agravado por el papel desempeñado recientemente por el Tribunal Constitucional. En lugar de consolidarse como un contrapeso frente a reformas que plantean serios cuestionamientos constitucionales e internacionales, el Tribunal ha contribuido a su permanencia o validación. Así ocurrió al no alcanzarse la mayoría calificada para declarar la inconstitucionalidad de la Ley No. 32107[13], pese a los estándares sobre imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y a las órdenes emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Barrios Altos y La Cantuta. En la misma línea, la sentencia recaída en el caso de Daniel Urresti, que anuló su condena por el asesinato de Hugo Bustíos sobre la base de la prescripción de la acción penal, refuerza una tendencia jurisprudencial que debilita la lucha contra la impunidad por graves violaciones a los derechos humanos[14].

En conjunto, estas reformas legislativas y decisiones jurisdiccionales reflejan un proceso de debilitamiento progresivo de los controles propios del Estado constitucional de derecho y evidencian la necesidad de reforzar los mecanismos institucionales de protección de los derechos humanos y de la democracia.

[13] Para mayor información, véase: https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2025/00023-2024-AI.pdf
[14] Para mayor información, véase: https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2026/02939-2025-HC.pdf


ENTRE
LINEAS
Observatorio de Proyectos de Ley